

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL
SALA DE DECISIÓN

Yopal, abril veintidós (22) de dos mil veintidós (2022)

REF: SENTENCIA ANTICIPADA
DELITO: DESAPARICION FORZADA y otros
PROCESADO: MELQUICIDEC GONZALEZ CAMARGO
RADICACION: 8500131070012019-0017
APROBADA POR: ACTA No. 040
MP. DR. ALVARO VINCOS URUE;A

Sentencia No. 003

VISTOS:

Decide la Sala el recurso de apelación presentado por el Ministerio Público, en contra de la sentencia anticipada de fecha enero diecisiete (17) de 2022, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare).

HECHOS:

De lo consignado en la sentencia se dijo “ se estableció mediante la denuncia por desaparición forzada, contra responsable número 0275 del 04/08/2008, ante la Fiscalía delegada ante los jueces del circuito de la ciudad de Villavicencio- Meta, impetrada por la señora María Elba Dáleman de Pisco, esposa del señor Gustavo pisco Sánchez, víctima dentro de la presente investigación, informa que el 20/01/2000 se dirigían de una finca hacia el municipio de Tauramena Casanare, cuando fueron abordados por varios sujetos, al parecer pertenecientes a las autodefensas campesinas de casanare ACC, dirigidas por su mentor Héctor José Buitrago Rodríguez, alias el patrón, es así que los detuvieron, lo bajaron del vehículo en que se transportaban y los amarraron a un palo, desde las 3 de la tarde hasta las 4:00 am, hora en la cual el sujeto que los cuidaba recibió una llamada y procedió a

liberar a la mujer, entregar los documentos de la víctima y procedió a llevarse del lugar, como la víctima opuso resistencia, le propinó un disparo y se lo llevaron herido en un carro con rumbo es desconocido, sin que a la fecha se conozca su paradero.

por las anteriores razones, la Fiscalía 175 especializada contra los delitos de Desaparición y Desplazamiento forzado De Santa Rosa de viterbo Boyaca, llamó a rendir indagatoria y vínculo a Melquisedec González Camargo por los delitos de desaparición forzada agravada, tortura y homicidio, conductas que aceptó la responsabilidad y Por lo anterior la Fiscalía procedió a enviar el expediente 113388 a este despacho, para que se prohiriera la respectiva sentencia “.

ACTUACION PROCESAL RELEVANTE:

Los hechos tienen ocurrencia en el mes de enero de 2.000. Se escucho en indagatoria el día 17 de abril de 2.018 a MELQUECIDEC GONZALEZ CAMARGO. En providencia de julio diecisiete de 2018 se define la situación jurídica, imponiéndole medida de aseguramiento, por los delitos de Desaparición forzada agravada, Tortura Agravada y Homicidio simple.

El día 06 de noviembre de 2018, se lleva a cabo la diligencia de aceptación de cargos con el anterior, por los delitos de Desaparición forzada agravada, Tortura agravada y homicidio, siendo víctima GUSTAVO PISCO SANCHEZ.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Condena a MELQUICIDEC GONZALEZ CAMARGO a las penas principales de 240 meses de prisión y multa de 1.333.33 S.M.L.M.V. de multa, como ejecutor material del delito de Desaparición forzada agravada. A la accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 10 años y le niega el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Decreta igualmente la prescripción de los delitos de Tortura y homicidio.

En cuanto a la prescripción, a pesar de que cita jurisprudencia y se refiere a la normatividad internacional existente para señalar los delitos de lesa humanidad, citando apartes de una decisión de este Tribunal, termina declarándola para el delito de Tortura y homicidio, ello por cuanto la Fiscalía no realizó ningún procedimiento con miras a declarar los delitos aquí investigados como crímenes de lesa humanidad. Y termina recordando que para cuando ocurrieron, se encontraba vigente el Decreto Ley 100 de 1980, “por lo que se impone aplicar la figura de la prescripción como lo indica el Honorable Tribunal de este Distrito Judicial de Yopal en la providencia referida”.

RECURSO:

Demanda revocar la declaratoria de prescripción de los delitos de HOMICIDIO Y TORTURA AGRAVADA decretada en favor del procesado GONZALEZ CAMARGO por ser los mismos claramente delitos de lesa humanidad. Alude que el a-quo desconoce no solo la realidad fáctica probatoria sino los pronunciamientos que para la Corte la no incorporación en la legislación interna de una norma que en sentido estricto defina los delitos de lesa humanidad, no impide su reconocimiento a nivel nacional, pues con base en el principio de integración -artículo 93 de la Carta Política- debe acudir a los instrumentos internacionales que por virtud del bloque de constitucionalidad obligan en la interpretación y aplicación de las normas.

El recurso hace extensa cita de apartes jurisprudenciales respecto de la prescripción en relación con los delitos de lesa humanidad.

Adicionalmente solicita en punto de la rebaja punitiva por sentencia anticipada que ella no sea retroactiva del precedente desfavorable atendiendo el principio de favorabilidad.

Durante el traslado a los no recurrentes no se hizo pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES DE LA SALA:

Para resolver el recurso presentado la Sala tendrá en cuenta conocida línea jurisprudencial que limita su competencia a lo que es objeto del recurso, salvo que por razón de este deban definirse asuntos que estén “inescindiblemente” ligados al mismo. Igualmente, que, por tratarse de una forma anormal de terminación del proceso, en la cual los procesados renuncian a la controversia probatoria y a cuestionar su responsabilidad, los aspectos para los cuales existe legitimación para recurrir excluyen estos aspectos. Por esa razón, el inciso tercero del artículo 40 del CPP, Ley 600, señala que el juez debe proferir sentencia “de acuerdo con los hechos y circunstancias aceptadas, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales”. Y para efectos de congruencia, en el mismo artículo, inciso sexto, se equipará el acta de aceptación de cargos a la resolución de acusación. Es decir, que de ninguna manera la sentencia puede desconocer lo recogido en el acta, en cuanto a los hechos, circunstancias y delitos imputados y aceptados.

En relación con el motivo del recurso, la Sala mantendrá la decisión, porque tal como se infiere del contenido del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, al equipararse el acta de formulación de cargos a la resolución de acusación, para el juzgador resulta jurídicamente imposible cambiar los términos de esta, condenar por delitos diferentes o de cualquier manera tomar decisión alguna que desconozca la acusación. Ni siquiera recurriendo a lo que se ha dado por llamar tipicidad flexible. Si una persona acepta los cargos que se le formularon, desde el año 2018, no puede ahora desconocer tal situación. Tipos penales que, para el momento de la formulación de cargos, ya existían, aunque no para el momento de los hechos. Inclusive en el acta correspondiente se imputan las conductas, pero sin hacer pliego directo y claro que los mismos son atentados contra el derecho internacional Humanitario, incluso señalando de manera clara el libro y el título del código penal, sin dudas, ambigüedad, para aceptación de cargos. Y esos fueron los delitos que ACEPTÓ el aquí procesado. En sentir de la Sala, condenarlo por un delito diferente sería desconocer el derecho de defensa material, el debido proceso, una garantía fundamental, luego jurídicamente no sería entonces posible condenarlo por un delito

diferente. Y no puede acogerse lo que allí se dice de tener en cuenta las penas previstas en los correspondientes tipos penales, pero aplicar las reglas del bloque de constitucionalidad para declararlos imprescriptibles, pues no parece muy técnico que dichas conductas, en contra de lo aceptado por el procesado, se declaren como de Lesa humanidad. La declaratoria de imprescriptibilidad conlleva necesariamente una condena, dada la aceptación de cargos. Haciendo la “conversión” simbólica, podría decirse que al procesado se lo estaría juzgando y condenando por delitos que no solo jamás en la apertura, indagatoria y acusación, sino que, para la época de los hechos, no existían en el CP. La tipicidad “flexible” no puede llevar a tal desconocimiento de las garantías fundamentales. Desde siempre se ha señalado al procesado como el eje del proceso penal. No pueden entonces desconocerse sus derechos fundamentales, so pretexto de la aplicación de normas internacionales que, para el momento de los hechos, por no existir, no fueron debida y claramente endilgadas.

Es del caso llamar la atención a la fiscalía para que desde un comienzo y de manera clara precise bien, el título y capítulo de las infracciones a investigar a efectos de no dejar dudas o ambigüedades y de paso evitar las prescripciones con lo que el Ministerio Público no comulga.

Sobre el punto de la rebaja punitiva en lo relativo al principio de favorabilidad no podría aplicarse una disminución mayor como se reclama en el recurso, puesto que la norma cuya aplicación se reclama dice que el descuento será HASTA de un 50 % no del 50% y, aunque no se señale en la providencia, el monto de la pena impuesta no trasgrede el principio de legalidad, puesto que tampoco se aplicó un descuento que desconociera lo ordenado por el artículo 352 del C.C.Penal. No debe olvidarse que los hechos ocurrieron en el año 2000, que el aquí procesado solo aceptó cargos el 06 de noviembre de 2018 y que para ese momento ya la fiscalía contaba con elementos para aspirar a formular acusación y con la expectativa razonable de una sentencia condenatoria. y aunque no sea determinante en la aplicación de la figura, se deben tenerse en cuenta también las circunstancias en que se cometieron los ilícitos.

Por lo expuesto, la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal (Casanare), administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia impugnada, de fecha enero diecisiete (17) de 2022, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Yopal (Casanare).

SEGUNDO. En firme esta providencia, devolver el proceso a su lugar de origen dejando las constancias y anotaciones necesarias. Para la notificación personal al procesado, se comisiona a la Oficina de Asesoría Jurídica de la Cárcel El Barne de Cóbbita- Boyacá, con tres (3) días de término.

Los Magistrados


ALVARO VINOS URUEÑA
Magistrado


JAIRO ARMANDO GONZÁLEZ GÓMEZ
Magistrado

GLORIA ESPERANZA MALAVER DE BONILLA
(en uso de permiso)